

# Artillería



## Ecuador y Colombia se alzan contra el neoliberalismo

Quito fue el escenario que sectores indígenas de Ecuador, con el apoyo de estudiantes, trabajadores y otros sectores, escogieron para dar a conocer las diez demandas al gobierno de Lasso, entre ellas la reducción de los precios del combustible. Mientras tanto en Colombia, por primera vez y por la vía del voto triunfa la izquierda. Bogotá celebra radiante la entrada del equipo constituido por Gustavo Petro como presidente y Francia

Márquez como vicepresidenta, ambos preparan las primeras acciones que harán la diferencia con el narcoestado paramilitar de los Uribe y los Duque. Los "nadies" de Eduardo Galeano se hicieron sentir en Quito y Bogotá, se escucharon sus voces y sus demandas se visibilizaron. Hoy es imposible pensar que los "nadies" no existen. Fotos/ Cortesía y Agencia Xinhua

Suplemento dominical del  
**CORREO DEL ORINOCO**

Lunes 25 de julio de 2022 • Nº 571 • Año 9 • Caracas

# Ecuador: un acuerdo alcanzado y una crisis que sigue

El gobierno y el movimiento indígena lograron un primer acuerdo, aunque la crisis política continúa. ¿Qué escenarios se pueden abrir en el Ecuador que vivió el Paro Nacional más grande de su historia?

T/ Marco Teruggi  
F/ Cortesía

El jueves en la tarde finalizó el levantamiento indígena en Ecuador. Los camiones cargados de personas comenzaron a retirarse en caravana y bajo aplausos de Quito hacia sus respectivas comunidades. Lo hicieron luego de 18 días de un paro nacional en el que participaron las diferentes organizaciones indígenas del país, transportistas, barrios populares, todos quienes salieron a protestar contra el gobierno de Guillermo Lasso.

Fueron casi tres semanas de cortes de ruta en las diferentes provincias, movilizaciones en la capital, una represión diaria, un saldo de cinco manifestantes asesinados, un país en crisis.

El acuerdo entre el movimiento indígena, en particular la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y el gobierno, tardó varios días en lograrse. El punto de inicio fue el lunes, cuando las partes se sentaron luego de dos semanas de protestas, con presencia de los diferentes poderes del Estado. El gobierno decidió al día siguiente no volver a la reunión, no reconocer al principal dirigente Leonidas Iza, y así redoblar una tensión al límite, atravesada por la muerte de un militar el lunes en la madrugada ocurrida en el marco de una represión en Sucumbios, región de la amazonía.

El miércoles apareció la posibilidad de la mediación de la Conferencia Episcopal, que ofició como teatro del encuentro el jueves en la capital. Finalmente, se llegó a un acuerdo pasado el mediodía. El principal punto resaltado del acuerdo, los 15 centavos de dólar de reducción en la gasolina y el diésel, dejó en un primer momento la impresión de poco luego de 18 días de movilización, una mirada que, sin embargo, no pareció predominante ante un ambiente de victoria.

No fue el único punto alcanzado gracias a uno de los despliegues de fuerza más prolongados y masivos del movimiento indígena ecuatoriano, frente a un presidente con poca legitimidad social, pero apoyo de los sectores de poder.

## LA PULSEADA

El gobierno de Lasso implementó varias estrategias conjuntas ante el levantamiento que llegó luego de un año de su mandato y más de 80% de desaprobación.



El paro indígena paralizó el país por varios días

Por un lado, una política de confrontación directa con Iza, quien fue detenido a inicio del paro, puesto en libertad, y tiene ahora una causa judicial abierta. Ese ataque contra el principal dirigente se combinó con un discurso para acusarlo de estar al frente de un intento de golpe de Estado, y por lo tanto justificar un estado de excepción con militarización y acciones represivas diarias y nocturnas, como en la noche del martes, en la localidad popular de San Miguel de Común, en Quito.

El gobierno buscó mostrarse en una posición de fuerza ante su primera gran crisis política. Esa posición adoptada dejó ver el respaldo de diferentes sectores de poder, tanto económicos, como policiales, militares, y políticos, en particular en uno de sus momentos más difíciles: la votación dentro de la Asamblea Nacional (AN) para lograr la destitución presidencial impulsada por el correísmo, algo que no ocurrió por falta de 12 votos.

El cálculo de Lasso, el círculo rojo, los factores de poder, fue que el movimiento indígena no podría sostener el paro de manera indefinida y que, en consecuencia, terminaría por aceptar una negociación más baja que la originalmente planteada.

La Conaie inició el paro con una agenda de diez puntos que incluyeron la reducción del precio de la gasolina y el diésel; el alivio económico para 4 millones de familias con moratoria y renegociación de deudas; mercos justos en productos del campo; moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera; petrolera; respeto a los 21 derechos colectivos indígenas; freno a las privatizaciones, entre otros. Una agenda de demandas sectoriales y a la vez de modelo económi-

co, con la bandera de Ecuador con un lugar central en las movilizaciones. Así, el movimiento indígena se puso a la cabeza de una demanda nacional a través de su levantamiento.

El cálculo de dirigencia de la Conaie era, tal vez, que el gobierno cedería antes de 18 días, como efecto de la crisis desatada, los impactos económicos, y las tensiones internas. Una reedición del levantamiento de octubre del 2019 y su mesa de diálogo, pero ahora con garantías reales para la implementación de los acuerdos. Sin embargo, el gobierno mostró respaldo para poder prolongar el conflicto, y la negociación tuvo lugar

en un cuadro de desgaste por los días transcurridos. Lo firmado fue expresión de esa correlación de fuerzas, un punto de cristalización en una crisis que viene desde antes del gobierno de Lasso y no tiene horizonte de finalización cercano.

## LA CRISIS NO SE CIERRA

El paro nacional logró varios objetivos: duplicar el presupuesto para la educación bilingüe; fortalecer los controles de precios contra la especulación; declarar en emergencia al sector salud; el fin del decreto 95 de política petrolera, subsidio en insumos para pequeños productores, entre otros.

## Los nadies de Colombia y Ecuador

T/ Pedro Brieger

Cuando «los nadies», al decir de Eduardo Galeano, se hacen oír, ya no es posible hacer como si no existieran.

El domingo 19 de junio Colombia se vistió de fiesta por el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Miles de personas los recibieron con cánticos en el microestadio donde esperaban con ansiedad el resultado de una segunda vuelta cabeza a cabeza. Afuera del estadio sonaban las bocinas de los autos y en numerosas esquinas y parques se congregaron para festejar y cantar.

Por primera vez en la historia de Colombia un binomio de izquierda llegaba al poder, y por la vía electoral. De esta manera lograron lo que varios movimientos guerrilleros no consiguieron en décadas

de lucha armada, de la que el mismo Petro formó parte durante un corto tiempo. Francia Márquez hizo alusión a “los nadies”, aquella expresión de Eduardo Galeano que remite a quienes no tienen voz, a quienes no se toma en cuenta, como si no existieran.

No es que no existan, son indispensables para que exista una sociedad. Son quienes cosechan los tomates y el arroz, limpian la basura de las calles, colocan los caños de agua bajo tierra para que llegue agua corriente a los hogares, entre tantos otros trabajos “invisibles”, aunque habría que decir “invisibilizados”.

Son extrañas nuestras sociedades: es posible que muchos de quienes producen los alimentos en el Cauca tal vez ni tengan suficiente comida en sus casas; o quienes colocan los caños de agua en Bogotá no tengan agua potable y vivan ro-

Habrán 90 días para llevar adelante los acuerdos. ¿Cuánto de lo acordado se implementará? Algunas respuestas están aún por verse dentro de una crisis que cerró el jueves uno de sus capítulos y se mantiene latente.

El paro de 2022 puede verse como continuidad del levantamiento de 2019: protestas masivas contra políticas neoliberales y gobiernos de derecha con respuestas centralmente represivas. La victoria de Lasso en el 2021 significó una profundización del modelo reinstalado por el ex presidente Lenin Moreno y, por lo tanto, de sus consecuencias y respuestas ante las mismas.

En ambos casos el movimiento indígena estuvo a la cabeza de las protestas. Entre 2019 y 2022 cambió su presidencia, ahora bajo el liderazgo de Iza, quien quedó como blanco político principal del gobierno que inició un proceso de judicialización de la protesta. El movimiento es a su vez heterogéneo, como se vio en la diferencia entre la Conaie y su instrumento político, Pachakutik. Mientras la primera encabezaba el levantamiento, el segundo adoptaba una política de respaldo al gobierno en la AN. Muchos congresistas indígenas se vieron presionados en sus comunidades para votar contra Lasso en el proceso de destitución que finalmente no alcanzó la mayoría necesaria, aunque sí logró una mayoría simple.

El país queda ahora en un momento de tranquilidad post enfrentamiento. Resulta incierto saber cuándo habrá nuevas protestas, seguramente encabezadas por el movimiento indígena que volvió a mostrar una capacidad de movilización nacional, masiva, legitimidad social, y un liderazgo instalado a nivel nacional en la figura de Iza.

En febrero del 2023 tendrán lugar las elecciones regionales que darán cuenta del mapa de fuerza en las urnas para el gobierno y sus aliados, el correísmo, y el movimiento indígena. 🗳️

Fuente: **Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)**



Un momento de alegría para los colombianos



Esperanza en el cambio

## De las urnas a las calles en defensa del Gobierno del Pacto Histórico

T/ Oto Higuaita  
F/ Cortesía

Ha concluido una fase de lucha política en Colombia a partir del triunfo electoral de Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta, primer gobierno no oligárquico elegidos por voto popular en la historia de la República.

La historia contemporánea, la de medio y corto plazo, se ha caracterizado por gobiernos de burgueses y de oligarcas de extrema derecha que basaron su poder, orden y control social a partir de alianzas con terratenientes, narcos y paramilitares expropiadores de tierras, con grandes grupos y monopolios empresariales y con élites políticas corruptas que capturaron al Estado y transformaron su esencia constitucional y democrática, convirtiéndolo en un aparato despótico, en un narcoestado cuyas instituciones sirven de “oficinas” privadas al servicio de los intereses de lo que llamamos la narcoligarquía.

Cambiar el estado de cosas injustas que rige en Colombia, aparte de tener

un gobierno con voluntad para hacerlo, requiere pasar de las urnas a las calles, de haber sido la oposición que intentaron liquidar durante décadas, a ser gobierno por primera vez y elegido mayoritariamente en el marco de la democracia formal burguesa con los peores vicios.

No obstante el salto histórico que acabamos de dar, la tarea urgente es prepararnos para defender lo conquistado en las urnas, desde las calles y campos articulados en un movimiento nacional con un propósito principal: restaurar la República Democrática Unitaria, pluralista y participativa cuyos pilares son el Estado social de Derecho, pues solo así habremos vuelto al punto de inicio para empezar a brindar una vida digna para todos y todas sus ciudadanas, para vivir sabroso.

Este convulso, dramático y esperanzador proceso que estamos viviendo ha abierto un nuevo escenario político de lucha cuyo actor principal ha sido el amplio y variopinto movimiento social, conformado por millones de organizaciones sociales (indígenas, afrocolombianas, campesinas, sindicales, estudiantiles, intelectuales, artistas, feministas, LGTBIQ), cuyo carácter policlasista, antirracista, étnico, antipatriarcal, feminista y antineoliberal lo hace único porque contiene al sujeto histórico de cambio que precisa el momento de lucha en el que estamos.

El escenario de cambio que se abre con el que sueñan millones de compatriotas y por el que también lucharon miles de ausentes, quienes no pudieron estar para celebrarlo porque la política de la muerte les truncó la vida, anuncia la restauración de la República democrática.

La supervivencia del gobierno del Pacto Histórico (PH) no depende exclusivamente del gabinete, las alianzas y el blindaje que el presidente Petro viene construyendo, depende también de otros actores y factores de poder, pero sobre todo, del movimiento social y político, de la capacidad que tengamos de articular, potenciar y reagrupar como un todo y con un mismo propósito al amplio y diverso movimiento social que es el soporte del nuevo gobierno, pues sin él no habrá garantía de restauración del Estado social de derecho.

Retomar el rumbo democrático en Colombia no se podrá sin la Paz Total; sin una reforma profunda a las instituciones (FF.AA., Policía nacional, ESMAD) que tienen la obligación constitucional de velar por la vida, bienes y seguridad de todos y todas; sin la garantía de los derechos fundamentales; sin una reforma agraria integral que distribuya las tierras improductivas y devuelva las expropiadas a sus legítimos dueños y de créditos a las familias campesinas; sin una reforma tributaria que genere los recursos para implementar la renta básica universal para millones de familias que viven en la miseria; sin derecho y acceso a educación y salud de calidad y pública, es decir, sin estos logros no se podrá “vivir sabroso”.

De ahí la importancia de entender el llamado de las urnas a las calles, porque está claro que el gobierno del PH va a tener que enfrentar una oposición política de derecha dura que no ahorrará esfuerzos en sacarlo del poder. En este sentido, va a ser la lucha extraparlamentaria, la batalla de ideas en las redes sociales, auditorios, asambleas, plazas y calle; la principal forma de enfrentar la política de la muerte de los gobiernos de la narcoligarquía.

El gabinete que está armando el presidente Petro muestra paridad, experiencia y el compromiso de los ministros y ministras nombradas, quienes serán “piezas” importantes del ajedrez de la nueva partida. Las otras fichas del ajedrez no necesitan ser nombradas a altos cargos públicos, hacen parte del amplio, polifacético y variopinto movimiento social. Son los y las que han luchado y se han movilizado en las calles, la fuerza de choque y de defensa de lo conquistado.

Lo más seguro es que las calles, plazas y campos serán de nuevo el escenario donde se dará la confrontación con las viejas fuerzas políticas que se opondrán al gobierno del PH hasta agotarlo y destruirlo. Es nuestro deber ético y compromiso político impedirlo. Si ya despertamos es porque tenemos la conciencia política para hacerlo. 🗳️

Fuente: **Telesurtv.net**



El movimiento reciente recuerda las protestas de 2019

El estallido social de los últimos días encuentra reminiscencias con el estallido del 2019. Los diez puntos planteados al gobierno por la CONAIE abarcan los aspectos más críticos y sensibles para la población.

T/ **Magdalena León Trujillo**  
F/ **Cortesía - I/ Pável Eguez**

**E**l término estallido, que sirvió para caracterizar la histórica jornada de protesta social contra el neoliberalismo en octubre de 2019, vuelve a hacerse presente este mes de junio. Se cumplen ya diez días de movilización popular, sostenida pese a una represión que ha dejado hasta ahora dos personas muertas y decenas de heridas, tanto en Quito como en otros lugares del país. En esta coyuntura, se conjugan condiciones similares a las del anterior estallido junto a otras nuevas, pero prima la incertidumbre en un ambiente de turbulencia política y profunda crisis social.

La convocatoria a paro nacional por parte de la CONAIE y el despliegue de su presencia tanto en sus territorios como en la capital Quito, constituye el eje de una movilización que suma a muchos otros sectores: estudiantes, trabajadores de la salud, transportistas, campesinado, mujeres, pequeños comerciantes, pobladores del campo y las ciudades, y muchas más. Un pueblo acorralado por la reimplantación del neoliberalismo, que siente que le arrancan sus posibilidades de tener patria, ese referente de pertenencia a un lugar y a un colectivo que construye condiciones compartidas de existencia y de proyectos de vida. La institucionalidad pública, desfigurada a hachazos por la arremetida 'anticorreista' a partir de 2017, hoy se muestra como la adversaria de un pueblo expuesto a la indefensión económica y social, a la represión, a la inseguridad y a la violencia.

Ha pasado un año desde que el banquero Lasso asumió la presidencia. Cinco años desde que su plan de gobierno se aplica, pues en 2017 el incalificable Moreno, electo gracias al apoyo popular a la Revolución Ciudadana, adoptó el plan de gobierno contrario, dejando paso a la retoma del poder por la derecha con el consiguiente giro neoliberal y anti estado. Como resultado, decir hoy que el país sangra no es una metáfora. En el nivel más inmediato, están los muertos y heridos de estos días, a manos de unas 'fuerzas del orden' eficaces para reprimir pero incapaces de controlar los recintos carcelarios donde han sucedido espeluznantes masacres el último año, o la seguridad en las calles donde la población padece una escalada delincuencia sin precedentes, la presencia de bandas armadas y el sicariato.

Alcanzan también esa connotación de herida las dificultades para trabajar y vivir que afrontan la mayoría de familias, en un escenario agravado por la pandemia y las políticas pro cíclicas y de austeridad fiscal. En 2020 el PIB cayó en -7.8% y no se prevé aún una recuperación a niveles previos, el desempleo y el subempleo se han disparado junto con una tendencia inflacionaria que no se experimentó en tiempos de dolarización. La protección social se ha reducido a mínimos con unos servicios públicos de salud y educación sometidos a recortes y precarización.

La saga neoliberal reincide en acciones que en el pasado llevaron a una crisis extrema (en el cambio de siglo), marcada por la quiebra del sistema bancario, la dolarización y la migración masiva de la población. Retornan actores y agendas de entonces, como una suerte de muertos vivientes. Si el propio Lasso es un banquero 'venido a más' en ese contexto de fraudes especulativos, en su equipo



## Un país herido que vuelve a estallar

de gobierno ha rescatado figuras de la época, desfasadas en muchos sentidos de las realidades y urgencias actuales del país. La distancia entre las necesidades del país y las orientaciones del gobierno es palpable y percibida por la gente, pues los hechos no pueden ser más elocuentes. Por ejemplo, el mismo día de mayo en que se produjo una nueva masacre de 40 personas privadas de la libertad en una cárcel (sumando 356 solo en lo que va del año), Lasso estaba en Israel -como primer presidente ecuatoriano en visitar ese estado- con preocupante agenda de seguridad y negocios. En esa visita, salió a relucir el dato de que el banco de su propiedad ha incrementado sus utilidades en 123% el último año.

En la fase del conflicto capital-vida del que volvimos a ser parte, la necropolítica acecha. En la primera fase de la pandemia, mientras se pagaba por adelantado un tramo de deuda externa, Guayaquil se llenaba de cadáveres en las calles. En el informe anual de gestión, Lasso enfatizó que los 18 millones de ecuatorianos le debemos la vida por haber aplicado el plan de vacunación para el Covid, al tiempo que mostraba como gran resultado los avances hacia la privatización del patrimonio y los servicios públicos. En estos días, mientras transcurre el paro nacional, se ha emitido un decreto para ampliar los despidos y reducir los salarios en el sector público.

Los diez puntos planteados como demanda al gobierno por la CONAIE abarcan los aspectos más críticos y sensibles para la población: precios de los combustibles, moratoria y renegociación de deudas personales y familiares, precios justos para la producción campesina, impulso al empleo y derechos laborales, límites a la extracción minera y petrolera, respeto a los derechos colectivos, no privatiza-

ción de sectores estratégicos y patrimonio público, control de precios básicos y de la especulación, presupuesto para salud y educación, políticas efectivas de seguridad y protección.

Si a nivel social la coincidencia con estas demandas desborda cualquier diferencia, en el plano político prevalecen las contradicciones. Un sector del partido Pachakutik se mantiene en alianza con el gobierno, como sucedió también en el período anterior. Los diálogos y negociaciones se ven interferidos por la represión y persecución. Está presente la experiencia de 2019, cuando en la mesa de negociación se diluyó una lucha social de doce días, terminando por imponerse la agenda del gobierno de entonces. Está puesta también sobre la mesa la activación de mecanismos constitucionales para un cese del gobierno, pero a riesgo de que sean tildados de 'golpismo' con la consecuente persecución judicial, como ya sucedió en 2019. Así, la salida política a la crisis es necesaria pero sus perfiles no quedan claros en estas horas.

¿Cómo es posible que un país que el mundo reconoció -y en unos casos conoció- por sus transformaciones y propuestas inéditas de cambio orientadas por la noción de Buen Vivir, se encuentre hoy atrapado en una espiral de empobrecimiento, desinstitucionalización y violencia? Es un interrogante que debe ser respondido colectivamente, como parte de la búsqueda de salidas que recuperen el camino recorrido hacia cambios de fondo. Es también un desafío para fuerzas sociales y políticas que están destinadas a entenderse, superando desencuentros inducidos y atendiendo al sentir de sus bases, como son la CONAIE y la Revolución Ciudadana. ✚

Fuente: Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)